

COLECCIÓN TERRITORIO, PODER Y CONFLICTO

María Clara Torres Bustamante

M.A en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Politóloga. Se ha desempeñado como investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y del Observatorio para el desarrollo integral, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento institucional de regiones afectadas por el conflicto armado (Odecofi) en los temas de cultivos ilícitos, violencia política y formación del Estado colombiano. También ha colaborado en los proyectos de intervención regional del Cinep en Putumayo, en los Programas de Desarrollo y Paz del Meta y del Magdalena Medio (Colombia).

Dentro de sus publicaciones se encuentran artículos sobre formación del Estado e ilegalidad en revistas especializadas colombianas, así como elaboración periódica de artículos sobre el análisis de la coyuntura política nacional para la Revista Cien días vistos por Cinep.

Fue ganadora, en 2008, del concurso "Estado, democracia y clases sociales" en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) para jóvenes investigadores con el proyecto "Estado y Coca en Putumayo". Igualmente, fue merecedora, en 2009, de la beca "Francisco José de Caldas" de Colciencias para estudios superiores en el exterior. Actualmente cursa estudios doctorales en Historia en State University of New York (SUNY).

Estado y coca en la frontera colombiana

El caso de Putumayo

El caso del Bajo Putumayo parece desmentir la suposición de que la economía ilegal de la coca va necesariamente en contravía de la formación del Estado en el nivel local: este libro muestra cómo el boom de la economía cocalera insertó a los campesinos en la economía monetaria y los fue llevando a buscar el reconocimiento político de sus poblaciones por medio de la creación de nuevos municipios y una activa participación electoral. Esta vida política aprovechó las experiencias previas de los colonos, tanto en sus localidades de origen como en la organización de la regulación social de las nuevas poblaciones, que fueron desembocando en la creación local del Estado a partir de los lazos previos de sociabilidad, como lealtades familiares, vecinazgos, compadrazgos y adscripciones políticas anteriores a la colonización; lo que les permitió ir superando su estigmatización como “campesinado ilícito” para lograr la implementación de políticas públicas favorables a sus localidades.



ODECOFI

Observatorio para el desarrollo,
la convivencia y el fortalecimiento
institucional



Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Colciencias
República de Colombia

COLECCIÓN TERRITORIO, PODER Y CONFLICTO

Mama Coca
El Papel de la Coca
www.mamacoca.org

Contenido

Agradecimientos	11
Prólogo	
La paradoja de orden estatal e ilegalidad Por Fernán E. González G.	13
Introducción	25
1. La coca y la formación del Estado local	33
El poblamiento	36
La diferenciación social	52
La monetización, la economía informal y los servicios públicos	60
Conclusión	67
2. La ambigua formalización estatal	69
“Elevar de categoría”	70
Las redes comunitarias y el Estado local	79
La domesticación del Estado o el incumplimiento selectivo de la ley	83
Conclusión	89
3. Sembrar coca, cosechar votos	93
La activa participación electoral	94

El significado de las elecciones	102
Conclusión	114
4. La textura del Partido Liberal	117
Hacia la "liberalización"	119
La formación conflictiva de las facciones regionales	126
Conclusión	147
Conclusión general	151
Coca y ciudadanía	153
Coca y formación del Estado	161
Bibliografía General	165

LISTA DE TABLAS

Tabla 1	
Áreas de cultivo de coca en Putumayo y en Colombia 1991-1999	45
Tabla 2	
Áreas de cultivo de coca en el Putumayo y en Colombia 2000-2007	45
Tabla 3	
Evolución de la densidad demográfica en Putumayo 1973-2005	47
Tabla 4	
Tasa de crecimiento poblacional de Putumayo y del país 1973-2005	47
Tabla 5	
Tasa de crecimiento poblacional por subregiones 1973-2005	48
Tabla 6	
Captaciones per cápita en Putumayo y Colombia 1995-2005	63
Tabla 7	
Servicios públicos en Puerto Asís, Orito y Mocoa 1985	66
Tabla 8	
Estructura de ingresos Putumayo 2005	87

Tabla 9	
Crecimiento de la votación en Putumayo y país 1951-2006	96
Tabla 10	
Crecimiento de la población en Putumayo y país 1973-2005	97
Tabla 11	
Votación de liberales elegidos a la Cámara de Representantes 1970-1990	131

LISTA DE ILUSTRACIONES

Mapa 1	
Subregiones de Putumayo	44
Gráfico 1	
Comportamiento de la población ajustada en el Putumayo 1973-2005	49
Gráfico 2	
Total votación Cámara de Representantes 1951-2006	95
Gráfico 3	
Votación por subregiones 1958-2006	99
Gráfico 4	
Porcentaje de abstención nacional y Putumayo 1968-2006	100
Gráfico 5	
Consolidado de los votos por partido político 1951-2006	120
Gráfico 6	
Distribución de la votación por partido político 1951-2006	121
Gráfico 7	
Distribución de los votos por partido Frente Nacional	122
Gráfico 8	
Distribución de los votos por partido 1974-2006	122

En suma, los cultivos ilícitos provocaron la activación de la frontera agrícola, aceleraron el ritmo de poblamiento, redujeron la dispersión de la población en el territorio, e impulsaron la construcción de incipientes centros urbanos. El *boom cocalero* impulsó una mayor densificación del entramado poblacional. Como se verá a continuación, la intensificación de las interdependencias se profundizará con el proceso de diferenciación social, también inducido por la economía de la coca.

Mama Coca

El Papel de la Coca

www.mama

La diferenciación social

El antropólogo Lawrence Krader (1972) considera que el Estado es una potencialidad que existe en todas las sociedades, pero que sólo llega a ser una realidad en algunas de ellas. En efecto, uno de los aspectos fundamentales para la formación estatal es el proceso de jerarquización social:

“Para que el Estado llegue a formarse, las personas han de sentirse impelidas a agruparse saliendo de las múltiples comunidades dispersas en que viven. Han de desgajarse del ambiente local para entrar juntos en un nuevo tipo de organización” (Krader, 1972: 13).

Desde esta perspectiva, los individuos tienden a trascender los lazos de parentesco y los vínculos de la comunidad local más o menos homo-

génea, para hacer parte de una agrupación más amplia y diversificada llamada “el Estado”²².

A juicio de Krader, “la presencia del Estado es un exponente de que la sociedad en que se da *ha llegado a tener* una organización compleja; y el proceso de formación del Estado es un medio para *iniciar* el período de *transición* hacia una sociedad compleja. Es decir, mediante el proceso de formación del Estado se crea una sociedad más compleja” (Krader, 1972: 13-14; énfasis original). De modo que los procesos de formación estatal producen y a la vez reflejan una mayor diferenciación social al interior de las comunidades.

En esa medida, las economías cocalera y cocainera introdujeron en la sociedad regional (y en el país) una amplia gama de actores ilegales más o menos estratificada. Así, por ejemplo, en la cima del ciclo de la producción y la distribución de cocaína se encontraban los capos. Según Rainer Dombois (1998), ellos eran las cabezas de los carteles y la porción más lucrativa de la cadena. Eran los comerciantes mayoristas del negocio. También eran exportadores con importantes funciones de coordinación y regulación. Los capos asumían un papel central en la regulación de las relaciones internas y externas a la organización mafiosa: sólo ellos tenían la capacidad de corromper por lo alto y sólo ellos tenían los recursos para acciones violentas de amplio rango, con los cuales castigaban el rompimiento de los compromisos, la traición y la delación. “Su autoridad, no sólo como hombres de negocios, sino también como poder organizacional era considerable” añade el mismo autor (Dombois, 1998: 21). No obstante, estos agentes tenían poca o ninguna presencia directa en la región y estaban más articulados a las grandes ciudades del país²³.

22 En una línea de argumentación similar, José Jairo González (1998) analiza los procesos de formación de las sociedades de la Amazonia colombiana y subraya que a medida que se consolida el proceso colonizador, las relaciones “comunitarias” van cediendo paso a relaciones más “societarias”. De modo que las comunidades van despojándose de las solidaridades llamadas “primarias”, las cuales todavía “se mueven en el nivel afectivo o tradicional”, como la familia, la vecindad, la afinidad religiosa o política, y paulatinamente transitan hacia “niveles de solidaridad superiores” asociados a los partidos, las instituciones y “el Estado” (González J.J., 1998: 74-76). Sin embargo, esta perspectiva presenta algunos problemas. Si bien las comunidades locales más o menos dispersas se articulan gradualmente a la sociedad nacional, ello no implica necesariamente el paso de vínculos “primarios” a otros más “abstractos”. Y esto porque los procesos de socialización política de los colonos no parten de cero. En efecto, los colonos no son individuos políticamente “vírgenes”. Ellos llegan a la Amazonia colombiana con adscripciones políticas y partidistas más o menos definidas desde sus lugares de origen.

23 Una excepción es el emplazamiento en Putumayo del emporio de Rodríguez Gacha durante los años ochenta.

En la región aparecieron personajes denominados los “paracaidistas”, esto es, compradores en gran escala, que clandestinamente aterrizaron en avionetas cargadas de tulas con dólares o pesos, hasta el centro de los grandes “laboratorios” donde se transformaba la coca en pasta y luego en base de cocaína (González J.J., 1998: 32).

Igualmente entraron en la escena regional los denominados *traquetos*, comerciantes de base y de cocaína refinada. Según José Jairo González (1998), ellos hacían parte del primer eslabón de la cadena de intermediación a gran escala de los empresarios de la coca. Su intermediación involucraba grandes volúmenes. Estaban más articulados a los grandes centros urbanos nacionales, donde se realizaba el ciclo de distribución para el mercado internacional. Generalmente vivían en las grandes capitales del país y hacían sólo breves incursiones en la región. Su código de lealtad estaba más ligado a los carteles de la droga y a los paramilitares (González J.J., 1998: 32).

Los *lavaperros* eran empleados de la nómina de los capos y de los *traquetos* que desempeñaban funciones de guardaespaldas, vigilancia o ‘toderos’ en oficios múltiples (Dombois, 1998: 21). En ocasiones, ellos podían hacer negocios propios comprando y vendiendo pequeñas cantidades de base de cocaína o cocaína refinada. Estas operaciones constituían premios o dádivas que les otorgaba el capo o el *traqueto*.

Otros agentes importantes eran los *chichipatos*, pequeños comerciantes al menudeo de la base de cocaína procesada en las “cocinas” o *chongos*. Actuaban como intermediarios entre los productores de base y los comerciantes de mediana escala. Según Omar Gutiérrez (2005), los *chichipatos* eran el enlace entre los narcotraficantes y la economía campesina cocalera controlada por la guerrilla de las Farc. Ellos se encargaban de ofrecer el precio de compra, garantizaban la calidad y almacenaban cantidades apreciables del producto (Gutiérrez O., 2005). Tenían una fuerte ascendencia en las localidades, de ahí que hubieran participado activamente en las marchas de 1996 al lado de los campesinos cocaleros (González J.J., 1998:31).

Aparecieron igualmente los campesinos cocaleros de reciente asentamiento en la zona, cuya actividad principal estaba dedicada a la producción de la coca, pero que dejaban un espacio mínimo para la siembra de alimentos. Su mayor aspiración era conseguir el excedente suficiente para hacerse una buena finca ganadera. La proporción entre el área de coca y la de alimentos era de 10 a 2 hectáreas a favor de los cultivos ilícitos (González J.J., 1998:31).

Otro actor relevante era el campesino cocalero que había llegado a la región hacía algún tiempo y que había estado vinculado a la actividad agropecuaria antes de la aparición de la coca. Su actividad siguió centrada en la producción de alimentos, pero dejaba una pequeña porción para los cultivos ilícitos. La proporción entre el área dedicada a la siembra de comida y aquella dedicada a la coca era de 10 a 2 hectáreas a favor de la primera. También aspiraba a invertir sus excedentes en la apertura de potreros y en la compra de ganado (González J.J., 1998:31).

Es importante advertir que, con el paso de los años, los campesinos cultivadores de la hoja se han involucrado cada vez más activamente en el proceso de transformación del alcaloide, apropiándose de la tecnología para producir pasta de coca (Dombois, 1998; Ferro, et al., 1999). Todos los miembros de la familia se han vinculado al cultivo y al procesamiento de la hoja en pasta. Inclusive los niños pequeños han colaborado en el trabajo, puesto que sus finas manos les han permitido desarrollar una habilidad especial para raspar la hoja sin maltratarla (Ferro, et al., 1999).

Cuando los cultivos han sobrepasado las tres hectáreas, se contratan trabajadores para raspar; estos son los llamados *raspachines* (Ferro et al., 1999)²⁴. Resulta importante advertir que éstos asalariados agrícolas no eran un grupo homogéneo. Era posible distinguir al menos tres tipos de *raspachines*:

1. "(...) aquellas personas con tradición campesina que por distintas razones (proceso de pauperización, descomposición campesina, etc.) terminan raspando hoja, pero mantienen su vocación agrícola y su voluntad de permanecer en el campo.
2. Los jornaleros agrícolas, antiguos trabajadores rurales o cosecheros de otras áreas agrícolas del territorio nacional, como recolectores de café y cosecheros de algodón, que aspiran asentarse en la zona, bien como asalariados, bien como campesinos.
3. Los *raspachines itinerantes* a quienes la búsqueda de fortuna los llevó lejos de sus sitios de origen, urbano o rural, pero que aspiran retornar a su tierra con algún beneficio económico" (González J.J., 1998: 30).

24 Los *raspachines* o los jornaleros recolectores de hoja de coca se dieron a conocer a los académicos, las autoridades estatales nacionales y a la opinión pública en general como actores sociales sólo en 1996 con la transmisión por los medios de comunicación de las grandes movilizaciones cocaleras ocurridas en el sur de Colombia (González J.J., 1998) (Gutiérrez O., 2005).

En un estudio más reciente sobre la economía política de la coca en el Bajo Putumayo, Oscar Jansson (2006) da cuenta de la variedad de funciones y agentes ilegales involucrados en la cadena productiva de las economías cocalera y cocaineira²⁵. El autor examina detenidamente el rol del comisionista como un eslabón específico de la cadena productiva. Este actor asume el oficio de intermediario: compra la pasta de coca al campesino cultivador y se la vende al “patrón duro”, esto es, al administrador del “laboratorio” o *chongo* donde la pasta de coca se cristaliza en cocaína. Este intermediario vive de la “comisión”, la cual representa la diferencia entre los precios de la materia prima que paga al cultivador y a su *patrón duro*. El comisionista puede ser un comerciante de pasta o la guerrilla de las Farc (Jansson, 2006).

En el primero de los casos, asegura Jansson (2006), el comisionista asume un rol de benefactor ante sus clientes: los campesinos cultivadores y procesadores de pasta de coca. Se erige en una persona fiable a la cual pueden acudir los productores de materia prima para aliviar necesidades económicas mediante créditos, en caso de fumigación aérea, erradicación manual, incautación de la mercancía por el Ejército o la Policía, o ante cualquier eventualidad de índole personal o familiar. Estos “favores” hechos al margen de las transacciones económicas regulares contribuyen, por un lado, a garantizar la continuidad de la producción y a crear relaciones de “endeudamiento moral” de los cultivadores hacia el comisionista, por el otro. La lealtad incluye la obligación de no cambiar de intermediario en ninguna circunstancia (Jansson, 2006).

Así, a lo largo de la historia del cultivo en el Bajo Putumayo, subraya el mismo autor, los comisionistas han trabajado para distintas organizaciones: los carteles de Medellín, Cali, Norte del Valle, las AUC, y últimamente *Los Rastrojos*. Usualmente, el intermediario sólo conoce su enlace inmediato, es decir al “patrón duro”, que puede ser el administrador de un laboratorio de cristalización nombrado por un cartel, o el comandante paramilitar de la zona. En la práctica, el intercambio económico entre los comisionistas y el patrón regula el precio de compra del comisionista a los productores de materia prima (Jansson, 2006).

25 Jansson (2006) sugiere que los conceptos de patrón y cliente resultan particularmente útiles a la hora de explicar la capacidad de las producciones cocalera y cocaineira para sostener una variedad de actores e integrarlos socialmente. El autor analiza las diversas coaliciones que se tejen entre agentes superiores e inferiores de la cadena, como relaciones de producción que trascienden las simples transacciones económicas y que están acompañadas de muestras continuas de “buena voluntad” de las partes.

De manera que el comisionista es a la vez patrón de los cultivadores y cliente del “patrón duro”. Debe privilegiar las ganancias de su superior, incluso a expensas de las suyas, y por supuesto, de las del productor de materia prima. Tiene la obligación, so pena de muerte, de nunca abandonar la alianza con su patrón para entrar en negocios con otro. Sobre el comisionista recae la obligación de revelar a su patrón información sobre sus clientes, como por ejemplo, el incumplimiento de plazos de entrega de la materia prima o la venta de ésta a otro comprador, como por ejemplo a la guerrilla (Jansson, 2006)²⁶.

A cambio de tales obligaciones, el intermediario suele recibir protección paramilitar ante el peligro que supone la guerrilla para su actividad económica. Y esto porque a finales de los años noventa, la insurgencia de las Farc se erigió en la mayor competidora de los comisionistas, cuando se propuso sacar a los intermediarios del negocio y reemplazarlos ella misma (Vásquez, 2009; Jansson, 2006; Ferro, 2004; Richani, 2002). En efecto, las Farc complementaron las ganancias derivadas del cobro de impuestos a los intermediarios, con el de las comisiones. Desde ese momento, ellas se convirtieron en antagonistas del cartel del Norte del Valle que controlaba la exportación de la cocaína producida en el Bajo Putumayo a finales de la década de los noventa (Jansson, 2006).

En este punto, Jansson sugiere que la creciente acción predatoria de las Farc sobre el negocio del narcotráfico aumentó los costos de producción de manera intolerable para el cartel del Norte del Valle, el cual pretendía sacar un máximo de valor agregado. De ahí que según Jansson, los narcotraficantes establecieran alianzas con los paramilitares del Bloque Central Bolívar, para que socavaran violentamente el control territorial que permitía a la guerrilla efectuar una presión predatoria sobre el negocio (1996).

Los asesinatos selectivos y las masacres perpetradas por los paramilitares para minar el influjo de las Farc sobre la población civil, resultaban también funcionales para los comisionistas, al tiempo que estrechaban sus vínculos con los paramilitares. En efecto, los comisionistas encontraron en el frente sur del Bloque Central Bolívar un aliado importante

26 Si un campesino no aparece el día previsto en la casa del comisionista con la mercancía, éste debe informar a su patrón paramilitar para que lo incluya en la lista negra. En su doble papel de patrón y cliente, el comisionista es a la vez benefactor y traidor (Jansson, 2006).

contra el peligro que significaba la guerrilla para su actividad lucrativa (Jansson, 2006)²⁷.

En el segundo caso mencionado arriba, cuando a finales de los años noventa las Farc asumieron la labor de los comisionistas, ellas también ejercieron un papel de autoridad protectora de los campesinos frente al poder del “patrón duro”, al cual le vendían la pasta de coca. Pero con una diferencia fundamental puesto que la guerrilla era mucho más eficiente en su labor de protección de los productores, que lo que podían ser los comisionistas individuales al servicio de las autodefensas. Y esto por una razón esencial: su capacidad de negociación con los estamentos superiores de la cadena productiva sobre el precio de compra de la mercancía a los productores de materia prima, estaba respaldada por su fuerza militar. De modo que los precios ofrecidos por la guerrilla a los cultivadores eran mejores que los pagados por los comisionistas en las zonas bajo dominio paramilitar (Jansson, 2006).

En las transacciones con las Farc, el “patrón duro” estaba obligado a pagar una comisión equivalente a más del doble que la que ofrecía al comisionista regular y a pagar simultáneamente un gravamen determinado para este actor armado. De modo que los ingresos de las comisiones y del impuesto crearon un margen para ofrecer un precio de compra mucho más favorable al campesino. En consecuencia, ellas pudieron asumir una importante función de redistribución del valor agregado, y por esa vía, reforzar su papel de benefactor ante los colonos y cocaleros de las zonas de colonización, los cuales constituyen una de sus bases sociales primordiales (Jansson, 2006; Richani, 2002; Ferro, 2004):

“Para nosotros —sostiene un comandante de las Farc—, un campesino que siembra coca no es diferente al que siembra cacao. Los dos viven de lo que la tierra les da. Nosotros decimos: es malo el cultivo de coca, y por eso hemos establecido normas. Por cada hectárea de coca que se planta hay que sembrar dos de comida. Pero lo que no podemos hacer es negarle a los campesinos el derecho a cultivar la coca, porque en Colombia todo el mundo, del Estado para abajo, vive de la coca (Citado en Puentes, 2006: 60)”.

27 Sin embargo, los paramilitares avanzaron en la defensa de sus propios intereses, buscaron maximizar la extracción de valor agregado y suplantaron las funciones del cartel. En 2005, ellos ya se habían establecido como los únicos que refinaban base, sacaban cocaína del Bajo Putumayo y desempeñaban directamente la labor de los comisionistas. Empero, esta nueva etapa duró solo hasta el año 2006, cuando el frente sur del Bloque Central Bolívar se desmovilizó en Puerto Asís. Desde su entrada a la región, en 1998, hasta su desmovilización en 2006, el rasgo distintivo de los paramilitares fue la de tratar a los comisionistas como clientes para explotar y controlar indirectamente a los cultivadores (Jansson, 2006).

El arbitraje de la economía de la coca por parte de la guerrilla ha sido un instrumento fundamental para su control territorial. También ha permitido la adquisición de ingresos económicos considerables para el sostenimiento y crecimiento material de la organización²⁸. Empero, las relaciones comerciales de las Farc con el negocio tienen efectos negativos en el ámbito político (Ferro, 2004; Richani, 2002). Ellas contribuyen a socavar el apoyo de las bases sociales al movimiento insurgente, en la medida en que conectan al campesino a los valores del capitalismo global, adversos al proyecto político de las Farc. Así, mientras las relaciones comerciales con el negocio de la coca permiten la expansión de la organización guerrillera, ellas estimulan simultáneamente el desarrollo del “enemigo”: los narcotraficantes que han trabajado con las Farc han pasado a apoyarse en las fuerzas paramilitares, dada la mayor identidad política que tienen con estas últimas (Ferro, 2004; Richani, 2002).

Hasta aquí hemos reproducido en detalle los planteamientos de Jansson (2006) para mostrar la imbricación de los actores armados en la cadena productiva de la coca, la relación que establecen con los cultivadores y su función de regulación del negocio en el bajo Putumayo.

Así las cosas, es posible sostener que la economía ilícita dio un fuerte impulso a la construcción de entramados y de redes sociales. Ella permitió ocupar una oferta creciente de mano de obra. También profundizó la división del trabajo al distribuir a lo largo de la cadena de producción un gran número de personas y de funciones, a través de los procesos de suministro de insumos agrícolas, la siembra, el mantenimiento del cultivo, la cosecha, la venta de precursores químicos, la transformación de la hoja en pasta de coca, luego en base de cocaína y finalmente en cocaína refinada. De suerte que la producción cocalera y *cocaínera* se constituyó en una larga cadena productiva en la cual intervinieron múltiples intermediarios, la mayoría de ellos ilegales.

Sin embargo, cabe resaltar que las posibilidades de ascenso permanecían relativamente abiertas, al menos en las etapas de la producción de la droga. Incluso, era posible advertir cambios importantes en el papel de los campesinos al interior de la cadena productiva, habida cuenta que los cultivadores de la hoja se involucraron cada vez más activamente en el proceso de transformación del alcaloide, produciendo pasta básica y

28 “Después de haber una gallina de los huevos de oro, no la iban a matar” sostiene un poblador de Cartagena del Chairá a propósito del dilema de las Farc de establecer vínculos comerciales con la economía de la coca (Ferro, 2004: 417).

en ocasiones hasta base de cocaína²⁹. Así pues, la cadena se caracterizaba por un alto grado de personalización de las relaciones y por una alta especialización de grupos en funciones determinadas (Dombois, 1998: 18-21).

En síntesis, la economía cocalera incidió en la aparición y en la consolidación de una amplia gama de actores ilegales con funciones y estatus desiguales a lo largo de la cadena productiva, al tiempo que promovió la división del trabajo y la especialización de ciertos agentes en determinadas etapas de la cadena de producción de la coca. A continuación se analizará cómo las interdependencias sociales se estrecharon también con la generalización del uso del dinero y con el desarrollo del mercado en Putumayo.

La monetización, la economía informal y los servicios públicos

El objetivo de este acápite es analizar cómo la economía ilegal de la coca aceleró el proceso de monetización de la economía y el desarrollo del mercado al interior de una sociedad que apenas comenzaba a formarse y a organizarse.

En aras de alcanzar este objetivo, se reconstruyen brevemente los planteamientos de Norbert Elias (1997) acerca de la relación entre la economía monetaria y la intensificación de las interdependencias sociales. Luego se examinan los efectos de la producción y del procesamiento de la hoja de coca, primero en la monetización de la economía; segundo en el comercio; tercero en las transacciones bancarias; y finalmente en la provisión de servicios públicos.

Según Elias (1997) no es posible comprender el uso del dinero en sí mismo, sino sólo en referencia a la estructura de las relaciones humanas. “El dinero —afirma el autor— no es otra cosa que un instrumento que se inventa la sociedad cuando aquellas cadenas se prolongan, cuando el trabajo y la distribución se diferencian mutuamente” (Elias, 1997: 277). De ahí que el concepto de economía monetaria remite a una sociedad

29 El estudio “Características agro-culturales de los cultivos de coca en Colombia” indica que en 2005 un 68% de los cultivadores de coca en Putumayo y Caquetá procesaba la hoja y solamente un 32% recurría a “cocineros” contratados especialmente para ello. También un informe de Naciones Unidas señala que el alto valor agregado de base de cocaína (57%), explica por qué la producción de hoja de coca se transforma en base de cocaína directamente por los cultivadores (Naciones Unidas, 2007: 50).

en la cual cada vez hay más intermediarios entre el productor y el consumidor, y en la cual se especializan las funciones.

Elias (1997) también sugiere que el dinero es propio de sociedades densamente pobladas. Una presión demográfica creciente permite alargar las cadenas entre quienes obtienen bienes de la naturaleza y quienes los utilizan. Sin cierto grado de densidad poblacional, el dinero pierde sentido. El dinero constituye entonces “una encarnación del entramado social” y “un símbolo de la interrelación de los actos de intercambio y de las cadenas humanas” (Elias, 1997: 294).

En una dirección similar, Karl Polanyi (1997) considera que la ausencia del uso del dinero indica un cierto aislamiento y una tendencia de las sociedades a la autarquía. No obstante, este autor coincide en que el mercado y el uso del dinero no son productos de la evolución “natural” de las sociedades. La generalización del uso del dinero tardó largos siglos en Europa. Durante mucho tiempo siguieron coexistiendo enclaves de economía natural al lado de zonas donde el comercio era un poco más dinámico (Polanyi, 1997)³⁰.

De modo que el dinero se hizo necesario cuando la división del trabajo y el intercambio se hicieron más complejos e intensos (Elias, 1997: 283-294). “El dinero es necesario cuando, dentro de una sociedad de intercambio, se constituyen cadenas más largas, esto es, cuando se da una cierta densidad de población, una imbricación social mayor y mayor diferenciación” (Elias, 1997: 294).

En Colombia, hacia finales del siglo XX, todavía coexistían zonas efectivamente integradas al mercado “nacional” al lado de otras donde el uso del dinero y el comercio eran mucho menos dinámicos, como Putumayo.

Ahora bien, es importante destacar que a su llegada a este rincón de la Amazonia, los colonos ya estaban familiarizados con el uso del

30 Según Karl Polanyi (1997), la creciente interdependencia entre poblaciones y territorios, así como la ampliación de las cadenas humanas gestaron la creación de mercados nacionales a través de largos siglos en Europa. “Hasta la época de la Revolución comercial, lo que podría parecerse comercio nacional no era sino municipal. (...) El comercio de Amberes o de Hamburgo, de Venecia o de Lyon no era de ningún modo holandés, alemán, italiano o francés. (...) Un mapa comercial de la Europa de esta época, para ser exacto, únicamente tendría que mostrar ciudades y dejar el campo en blanco, pues éste, en lo que concierne al comercio organizado, era prácticamente como si no existiese. Las pretendidas naciones eran simplemente unidades políticas –y aún muy laxas– formadas desde el punto de vista económico por innumerables familias autosuficientes de todos los tamaños y por modestos mercados locales situados en las aldeas” (Polanyi, 1997: 113).

dinero, toda vez que provenían del interior del país. Además, la bonanza petrolera ocurrida en años anteriores ya había hecho avances en ese sentido. De ahí que la economía cocalera no introdujera el empleo del dinero en la región, pero sí acelerara la generalización de su uso mientras dinamizaba el desarrollo del comercio.

Desde principios de los años ochenta, la población con vocación agrícola se dedicó casi exclusivamente a la plantación de hoja de coca pese a las recomendaciones de la guerrilla de las Farc de reservar una pequeña superficie de la parcela campesina para la siembra de productos de subsistencia, como una manera de sortear las caídas en los precios de la coca y de limitar la expansión de las relaciones de producción capitalistas. Al punto que los productos usuales en las zonas de colonización, como la yuca, el plátano y el maíz, escasearon y tuvieron que transportarse desde otras regiones del país (Comisión Andina de Juristas, 1993: 21)³¹.

La economía cocalera encareció los productos y aumentó repentinamente el costo de vida. Se introdujeron bienes de lujo como automóviles, plantas eléctricas y un número considerable de armas de fuego, así como artículos de consumo como motosierras, equipos de sonido y motores fuera de borda (Corsetti et al., 1987) (Rivera, 1995: 251).

En los años ochenta, los caseríos del Bajo Putumayo, en especial La Dorada, La Hormiga y San Miguel, florecieron como centros de mercadeo de la pasta de coca y se transformaron, por esa vía, en pequeños núcleos urbanos donde los colonos llegaban a hacer transacciones, a vender sus productos y a comprar remesas. Además, centenares de migrantes de todo el país eran contratados allí para transformar la pasta en base de cocaína (Ramírez M., 2001) (Ramírez R., 1998).

Simultáneamente, se reactivó el dinamismo comercial de los poblados surgidos durante el *boom* petrolero, como Puerto Asís y Orito, los cuales se consolidaron como epicentros de esta subregión. Proliferaron

31 El no acatamiento de las reglas de las Farc en Putumayo ilustra el tipo de relaciones establecidas entre los campesinos cocaleros y la guerrilla de las Farc en Putumayo. Advuértase que la insurgencia llegó a la región después de que los cultivos ilícitos se hubieran instalado. En cambio, en el Guayabero (Meta), el estudio de Omar Gutiérrez (2005) muestra que los campesinos sí acogieron las directrices guerrilleras de consagrar un área pequeña de la finca a la siembra de cultivos de pancoger. Esta última región se caracteriza por ser una zona de colonización armada en donde la insurgencia de las Farc se erigió en árbitro de los procesos de ocupación del territorio (Gutiérrez O., 2005). De ahí podría explicarse la mayor ascendencia de la guerrilla sobre los campesinos cultivadores de hoja de coca.

los c
tena
ropa
por
y esp
F
tran
Deso
cápi
peso
ción
S
te irr
tre 1
ocho
medi
que e

los centros de prostitución, las discotecas y los bares. Se levantó un centenar de casas, comercios, cantinas, hospedajes, restaurantes, tiendas de ropa y almacenes de agroquímicos. En suma, los excedentes producidos por el negocio de la coca desarrollaron considerablemente el comercio, y especialmente el comercio informal.

Resulta igualmente interesante analizar el comportamiento de las transacciones bancarias en una zona sumergida en una economía ilícita. Desde una perspectiva netamente regional, el total de captaciones *per cápita* en Putumayo creció considerablemente: pasó de \$179 a \$1.049 pesos colombianos entre 1995 y 2005. En tan solo una década las captaciones *per cápita* aumentaron en un 486% (tabla 6).

Sin embargo el nivel registrado en el departamento era absolutamente irrisorio, en comparación con el comportamiento de todo el país. Entre 1995 y 2005, el promedio de captaciones *per cápita* en Putumayo era ocho veces inferior al promedio nacional. Así, entre 1995 y 2005, el promedio de captaciones *per cápita* en la región era de \$967 pesos, mientras que en el país era de \$8.175 pesos colombianos (tabla 6).

Tabla 6

Captaciones per cápita en Putumayo y Colombia 1995-2005

Año	Putumayo (en miles de pesos de 1998)	Nacional (en miles de pesos de 1998)
1995	179	2.938
1996	653	10.386
1997	824	10.572
1998	840	10.594
1999	831	9.362
2000	982	8.081
2001	1.065	7.449
2002	1.338	8.246
2003	1.372	7.796
2004	1.509	8.139
2005	1.049	6.363
Promedio 1995-2005	967	8.175

fuente: elaboración propia y Cerac con base en Superintendencia Financiera

El escaso nivel de captaciones bancarias contrastaba con los ingentes recursos de la producción y del procesamiento del alcaloide. En Putumayo, el sistema bancario captó un total de \$325 millones de pesos en 2005. Y, en 2006, el mercado ilegal de la hoja de coca alcanzó en la región un valor bruto de US \$77 millones de dólares anuales, esto es, alrededor de \$182 mil millones de pesos, cifra muy superior al total de captaciones bancarias regionales.

Lo anterior indica que el dinero de la producción y del procesamiento de la droga ingresaba sólo tangencialmente al sistema bancario regional. Esta situación se debió, en parte, al escaso número de instituciones financieras existentes en la región³².

El contraste entre el nivel de captación y los recursos de la producción de hoja de coca está también relacionado con la poca difusión de la práctica del ahorro entre los habitantes de las zonas cocaleras. Ahora bien, de ahí no se desprende que no había ahorro en absoluto, sólo que éste pasaba muy rara vez por las redes del sistema bancario.

Para dar un ejemplo, en los años ochenta, el emplazamiento del emporio cocalero y *cocaínero* de Rodríguez Gacha denominado “El Azul”, produjo leves efectos en la actividad de las pocas instituciones financieras que existían en la región. El estudio realizado por María Victoria Rivera (1995) estima que hacia mediados de los años ochenta, el Banco Ganadero de Puerto Asís tenía movimientos sólo por 300 y 500 millones de pesos en giros de cuentas corrientes. Mientras tanto, se fletaban aviones en las cuales se cargaban tulas llenas de dinero (Rivera, 1995: 251).

Además, los *raspachines* y los campesinos cocaleros acudían a formas de ahorro informales, tales como el entierro del efectivo en la tierra. Más aún, desde 2005, los habitantes acudieron masivamente a instituciones alternativas al sistema bancario para multiplicar sus ahorros, tales como DMG y una decena de pirámides.

Posiblemente, el carácter ilegal de la economía estimuló a los distintos agentes regionales involucrados en el ciclo de la producción del alcaloide a evadir el sistema bancario, con el fin de esconder el origen ilícito del dinero.

32 Nótese que en 2008, había únicamente cinco cajeros electrónicos en todo el departamento. El Banco Agrario era la única institución financiera en cuatro municipios y no había ninguna entidad bancaria en cinco de los trece municipios de Putumayo.

En síntesis, es claro que los datos sobre transacciones bancarias resultan poco confiables a la hora de analizar el grado de monetización de esta economía regional ilícita. Tal vez el monto de los jornales de los *raspachines* y los ingresos de los campesinos cocaleros sean de mayor utilidad para esta empresa. Según los cálculos de Sergio Uribe (2000), el ingreso de un *raspachín* es en promedio un 20% más de lo que es el valor del jornal local.

Por su carácter de cultivo permanente, la coca ofrece a los cultivadores menores riesgos económicos y mayores posibilidades de un ingreso constante en un espacio reducido de una a tres hectáreas. Por supuesto, constituye una gran ventaja con respecto a los bajos rendimientos, los malos precios y las dificultades de transporte de cualquier otro producto agrícola. En términos individuales y muy locales, ella permite satisfacer necesidades materiales inmediatas de los campesinos (Ferro, et al., 1999).

Empero, es importante destacar que el productor de materia prima es uno de los eslabones más débiles de la cadena productiva pues recibe, en proporción, la parte más ínfima del excedente. De suerte que la gran mayoría de los pequeños cultivadores no ha generado acumulación de capital y se encuentra inmersa en un ciclo continuo de escasez-consumo-escasez:

“En el tiempo que había harta plata —relató una campesina cocalera de origen nariñense—, el marido me decía que nos fuéramos pa’ fuera a ver la familia. Pero imaginación de uno no más, porque los patrones venían a rogar adelantado para trabajar y le decían a uno: ‘mire, acompáñeme a mí, que yo le pago a tanto’. No era necesidad de uno andar buscando trabajo, sino que los patrones adelante le venían a rogar. Y cuando fue la funigación, ahí quedamos. O sea que cuando uno tiene plata, uno se confía demasiado. El marido decía que dos o tres semanas sacaba pal’ viaje. Y el día sábado iban a jugar gallos. Si había fiesta por allá, se ponían a tomar bebidas finas, se gastaban la plata porque sabían que en dos o tres semanas se jornaleaban. ¿Y qué nos pasó con eso? Que otra vez en el 2000 llegaron las autodefensas, llegaron ahí y ya otra vez no nos podíamos ir y no teníamos plata pal’ pasaje. Y uno es terco porque con tanta cosa que hemos vivido aquí... la funigación dejó esto hecho un desierto”³³.

Por último, resulta importante advertir el contraste entre la precariedad en la provisión de servicios públicos y los ingresos relativamente

altos derivados de la coca (en comparación con otro producto agrícola). Si bien la producción ilegal de la droga dio un fuerte impulso al desarrollo de la economía informal, ella no tuvo mayores efectos en el mejoramiento de la infraestructura y de los servicios públicos, tal como se evidencia en la tabla 7.

Así, en 1985, era evidente el fuerte atraso de los municipios cocaleros de Orito y Puerto Asís (Bajo Putumayo), incluso respecto de otra localidad desprovista de cultivos ilícitos como Mocoa. Las desigualdades en el índice de calidad de vida y en la cobertura de servicios públicos, como el alumbrado público, el porcentaje de calles pavimentadas y el número de establecimientos educativos eran indiscutibles (tabla 7). Aún si Orito era uno de los epicentros de las bonanzas petrolera y cocalera, en 1985 el municipio no tenía ni alumbrado público y ni una sola de sus calles estaba pavimentada (tabla 7).

Tabla 7
Servicios públicos en Puerto Asís, Orito y Mocoa 1985

Servicios públicos	Subregión del Bajo Putumayo		Capital del Putumayo
	Puerto Asís	Orito	Mocoa
Índice de calidad de vida del municipio	28.4	33.7	46.2
% cobertura teléfono residencial	50%	Menos del 50%	Más del 50%
% cobertura alumbrado público	Menos del 50%	No tiene	Más del 50%
% calles pavimentadas	Menos del 50%	No tiene	Más del 50%
Existencia planta purificadora acueducto	No	No	Si
Existencia sistema recolección basuras	No	Si	Si
No. Puestos de salud	5	10	40
No. Médicos	5	2	20
Existencia matadero	No	Si	Si
No puestos de policía	1	2	0
No. Notarías 1990	1	0	1
Biblioteca pública	Si	No	Si
Total de establecimientos de preescolar	0	0	7
Total establecimientos de primaria	6	1	58
Total de establecimientos de secundaria	1	0	3
Tasa de analfabetismo total en 1985	21.2	18.4	17.2

Fuente: elaboración propia con base en Censo de 1985. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (Dane).

Sin duda, los ingresos de la coca daban a los colonos algún margen de maniobra para satisfacer individual y colectivamente ciertas necesidades. Organizados en Juntas de Acción Comunal, los colonos pagaban maestros y construían caminos veredales, puentes y escuelas. Las familias instalaban aljibes y compraban plantas eléctricas en sus casas a fin de compensar la ausencia de servicios públicos domiciliarios.

No obstante, cabe advertir que los alcances de tales iniciativas individuales y comunitarias eran limitadas, toda vez que los pobladores no tenían la capacidad logística para garantizar el suministro de servicios como acueductos, carreteras pavimentadas e interconexión eléctrica. De ahí la importancia de la movilización campesina (Ramírez M., 2001) y de la participación electoral a la hora de demandar infraestructura y servicios públicos al Estado central.

Conclusión

Se ha visto hasta aquí cómo el auge de una economía ilegal generó indirectamente las condiciones necesarias para la formación del Estado en Putumayo. La economía cocalera promovió la permanencia en el territorio de unas poblaciones numéricamente importantes y una organización social más o menos compleja y estratificada. El comercio también cobró un dinamismo inusitado gracias a los excedentes producidos por el negocio.

Como es apenas obvio, los procesos estudiados en este artículo no son un resultado planificado de voluntades individuales o de una conspiración mafiosa para la construcción estatal. Para retomar una expresión de Tilly (2007: 37), estas dinámicas “no son sino la recapitulación de un proceso histórico habitual”, a través del cual se producen ciertas regularidades sociológicas indispensables para la configuración estatal. Si se quiere, aquí lo particular radica en que estos procesos fueron indirectamente impulsados por una economía ilegal.

Todo lo anterior revela varias paradojas. La primera consiste en que mientras la producción de la droga es perseguida en el nivel nacional, ella favorece indirectamente la construcción estatal en la región. Ahora bien, dicha economía también presenta límites importantes.

De ahí la segunda paradoja. Si bien el carácter ilegal de la economía aumentó la capacidad adquisitiva de los habitantes, dicha condición de ilegalidad ha mantenido la economía en la marginalidad. Ciertamen-

te, ella generó cierto bienestar entre la población, al ocupar una oferta creciente de mano de obra, al asegurar el pago de contado y la existencia de redes de financiación. No obstante, los agentes, los bienes y las transacciones económicas no gozan de protección legal y los excedentes tampoco ingresan en el sistema bancario regional. El comercio informal se desarrolla pero escapa en gran medida a la tributación.

La tercera paradoja radica en que si bien la economía cocalera produce las condiciones necesarias para la formación estatal, ella no garantiza que la región y sus habitantes puedan superar su condición de marginalidad. El dinero y las ganancias de la economía cocalera parecen no ser suficientes para obtener una adecuada infraestructura de bienes y servicios públicos. Pese a los ingresos relativamente altos de la coca, las comunidades cocaleras sencillamente no tienen la capacidad material para organizar y proveer ciertos servicios. Para dar sólo un ejemplo, los *raspachines* y cocaleros pueden comprar plantas de energía eléctrica, construir trochas y aljibes por su cuenta, pero no pueden garantizar interconexión eléctrica, ni carreteras, ni acueductos. El carácter ilegal de la economía permite satisfacer algunas necesidades, pero tiende a mantener la condición de marginalidad de la región y de sus habitantes respecto de la sociedad nacional³⁴. Este es uno de los límites de la economía cocalera. El Estado central se vuelve entonces un imperativo. Falta ver cuáles son los aspectos de vida local que pueden efectivamente pasar por el tamiz de la formalización estatal en una sociedad de colonización reciente sumida en una economía ilegal, tema que abordaremos a continuación.

34 Es importante dimensionar el fenómeno de la coca en una perspectiva nacional. Según un informe de Naciones Unidas (2008), los cultivos de coca ocupan tan solo el 2% del total de la superficie agrícola colombiana. Esto muestra que el cultivo de coca es altamente eficiente, en tanto que la pequeña superficie de tierra dedicada a la siembra de ilícitos suple el 50% del mercado mundial de cocaína y constituye el principal producto agrícola de exportación colombiano. El mismo reporte de la ONU (2008) estima que en 2007 el área sembrada de coca en todo el país equivale a 99.000 hectáreas. Para ser escuetos, esta cifra equivale a la extensión de sólo cuatro fincas palmeras de Víctor Carranza en los llanos orientales, o cuatro hatos ganaderos de Salvatore Mancuso en la Costa Caribe. La estructura de la economía cocalera resulta mucho más democrática respecto, por ejemplo, de la palma africana o de la ganadería habida cuenta que con sólo el 2% del total de la superficie agrícola, había en 2007 88.000 hogares colombianos involucrados en la siembra de coca (sin contar la población flotante), mientras presumiblemente sólo una decena de familias se beneficiarán de los cuatro predios narcoparamilitares.